

# Las reacciones sociales a las políticas de reforma en Argentina y Bolivia

Macarena Romero

Estudiante de Ciencia Política

✉ romeromacarena@yahoo.com.ar

## ■ Contexto internacional. Crisis del Estado de Bienestar y emergencia del modelo neoliberal

La edad de oro del capitalismo en los países centrales (1950-fines de la década del 60) se caracterizó por la implementación del modo de regulación<sup>1</sup> fordista, el cual, posibilitaba que la elevación del salario provocara un crecimiento sostenido del consumo masivo, garantizando así el nivel de demanda. Ello se articulaba con una fuerte presencia del Estado en la producción de bienes y servicios, y en la gestión monetaria y fiscal (Estado Benefactor).

Este modelo comienza a encontrar sus límites a fines de la década del 60, pero la crisis no se hace explícita hasta los 70. La crisis estanflacionaria (combinación de inflación con recesión) abrió un espacio para el cuestionamiento de la excesiva presencia estatal en la economía, basado en el diagnóstico de que la recesión era consecuencia de las excesivas reglamentaciones gubernamentales que obstruían las fuerzas del mercado. La inflación se explicaba por la desmedida extensión del gasto público y por la fortaleza del sector del trabajo en la puja redistributiva. Frente a este diagnóstico se procede al desmantelamiento del Estado de Bienestar y se ponen en práctica nuevas dinámicas en el mundo del trabajo, que repercuten negativamente sobre la distribución del ingreso y sobre la cohesión de la clase obrera.

Estos procesos en los países centrales se trasladan a la periferia, la cual les imprime su dinámica propia, en un contexto dependiente y vulnerable frente a las economías centrales.

La reproducción del régimen de acumulación capitalista depende, en gran medida, de la capacidad de las elites gobernantes para articular mecanismos de cohesión y consenso. Sin embargo, en los casos nacionales que nos ocupan, los dispositivos de consenso social se presentan en extremos débiles frente a las dinámicas de desarticulación social en marcha.

El desmantelamiento del Estado en América Latina implica la desaparición del eje central alrededor del cual se articulaba en gran parte toda la dinámica social<sup>2</sup>.

Su desarticulación del Estado revela un régimen de acumulación que no logra

---

<sup>1</sup> El concepto hace referencia a los mecanismos que aseguran la reproducción de un régimen de acumulación (en este caso capitalista) pese a las tendencias contradictorias inherentes a la dinámica de dicho modo de producción. López y Díaz Pérez, "Tristezas y melancolía del capitalismo", Revista de economía política "Pensamiento iberoamericano", N° 16. Madrid, 1989.

<sup>2</sup> Recordemos que en gran parte de América Latina fue el Estado el que constituyó a la sociedad, y no al revés. Debilitados los nexos de tipo tradicional y ante la ausencia de una clase burguesa, el Estado se levantó como principal núcleo integrativo de las sociedades latinoamericanas. Toer, Mario, "Algunas notas sobre momentos significativos de la historia social de América Latina". Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.

rearticular su dispositivo hegemónico. Las condiciones para un estallido social habían sido sembradas.

### ■ Las versiones nacionales del Estado Benefactor

En América Latina, el modelo agroexportador encontró su límite en la década del 30, como consecuencia de los sucesivos deterioros en los términos de intercambio, y el abrupto cierre de los mercados en las economías centrales.

Ello generó la necesidad de desarrollar una vía alternativa de crecimiento económico, basada en una industrialización que permitiera la producción de bienes manufacturados que, hasta ese momento, se importaban de los países industrializados.

La expresión política de este cambio socioeconómico fue, en el caso argentino, la emergencia del movimiento peronista, el cual articuló, desde el Estado, una alianza populista multclasista, de carácter contradictorio, que entrelazaba los intereses de empresarios y trabajadores. Es en este período donde se configura la identidad de la clase trabajadora, estrechamente ligada al Estado peronista.

Fue la dinámica corporativista de este Estado la que posibilitó el surgimiento de sindicatos fuertemente ligados al aparato estatal, característica que perdura hasta nuestros días, y de la cual la CGT es su mayor legado y exponente.

Bolivia entra en el siglo XX bajo la lógica de un Estado Oligárquico. Los latifundios eran el medio preponderante de la propiedad de la tierra y la economía estatal estaba basada en la minería de la plata y el estaño. La conformación del sindicato minero, y el contacto de este grupo con la clase campesina, impulsó la conformación del sindicato campesino (la guerra con el Chaco de 1932 y la migración campesina y posterior retorno de éstos a sus comunidades generaron espacios de interacción entre ambos sectores).

La crisis del Estado oligárquico y la emergencia de estas fuerzas contestarias condujeron a la Revolución Nacional de 1952, que instauró un Estado de Bienestar. Concebido inicialmente como un golpe, se convertiría en un alzamiento popular armado que rebalsaría las intenciones de los golpistas. Es bajo el calor de esta revolución que nace la Confederación de Obreros Bolivianos (en adelante COB), sindicato que asumirá el rol de “co-gobernante” (poder dual) en el nuevo Estado<sup>3</sup>. A diferencia de la CGT argentina, no nace en el seno del Estado Benefactor, sino al calor de la revolución que llevó a su instauración.

El *Estado del 52*, al igual que su homónimo peronista, desarrolló un capitalismo de estado en lo económico (se le asignaba al Estado el rol principal en la generación y la distribución del excedente económico), un corporativismo-prebendalista en lo político y un carácter nacionalista-modernizante en lo ideológico<sup>4</sup>.

### ■ Implementación doméstica del modelo neoliberal. Sus condiciones de emergencia

Carlos Menem en Argentina, y Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, fueron los líderes que tomaron a su cargo la implementación de las políticas de reformas. Sin

<sup>3</sup>Tom Kruse. Transición política y recomposición sindical. Reflexiones desde Bolivia. <http://sala.clacso.org.ar>

<sup>4</sup>idem.

embargo, ninguno de ellos llegó a la posición de líder de gobierno como partidario de éstas.

Su decisión a favor de las reformas no descansó en una motivación ideológica, sino en que suministraba la promesa de una salida a la crisis hiperinflacionaria que estaban atravesando ambos países<sup>5</sup>.

El caso boliviano se diferencia de los demás países democráticos de la región por haber sido el primero en la aplicación de las reformas neoliberales<sup>6</sup>.

En agosto de 1985, a través del decreto 21.060, el gobierno del recién electo presidente Paz Estenssoro introdujo la Nueva Política Económica (en adelante NPE) en Bolivia.

La NPE impuso un giro radical a la estrategia de desarrollo liderada por el Estado que venía teniendo lugar desde la conformación del *Estado del 52* por el propio partido de Estenssoro, el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario). Su sucesor, Jaime Paz Zamora, electo en 1989 a través del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), adoptó y profundizó esta política. La misma línea siguió Banzer, electo en 1997 por ADN (Acción Democrática y Nacionalista), y el siguiente presidente, Sánchez de Lozada, del MNR electo en el 2002.

En Argentina, el primer intento de introducción de algunas reformas estuvo a cargo de Raúl Alfonsín, electo por la UCR en 1983. El carácter moderado de las reformas que se proponía encarar no garantizó el éxito de su propuesta. Pudo llevar a cabo la liberalización económica, pero la privatización parcial de empresas estatales de transporte aéreo y telecomunicaciones fue bloqueada por oposición legislativa (del PJ y de una fracción de la propia UCR).

La agudización de la emergencia económica en 1989, marcada por la explosión hiperinflacionaria, llevó a Alfonsín a renunciar cinco meses antes de terminar su mandato, asumiendo como presidente entrante Carlos Menem. En sus dos mandatos consecutivos, logró llevar mucho más lejos que su antecesor la implementación de la política de reformas.

Menem logró reunir bajo su conducción política el apoyo de las bases populares del peronismo con los intereses del poder económico, formando una amplia coalición de gobierno. Ello, sumado a una enérgica campaña de desprestigio al Estado como prestador de servicios, le permitió llevar a cabo las privatizaciones de las empresas estatales que le fueron bloqueadas a su antecesor, además de las empresas de servicios, ferrocarriles, correo, la empresa petrolera estatal YPF, entre otras.

### ■ Las reacciones sociales a las políticas de reforma. El papel de los sindicatos

En ambos países, el contexto hiperinflacionario modificó las condiciones de recepción social de las políticas de reforma. Los beneficios que aportaría la estabilización económica superaban o compensaban los costos que implicaba en materia distributiva. El contexto macroeconómico de emergencia en ambos países

<sup>5</sup> Torre Juan Carlos. "El proceso político de las reformas económicas en América Latina". Ed. Paidós, 1998.

<sup>6</sup> Vale recordar que el primer país de la región que llevo a cabo las reformas fue Chile, en la década del 70, pero éstas fueron encabezadas por un gobierno de facto. La relación dictadura-neoliberalismo le imprime, desde nuestra óptica, características singulares a la lucha social, diferentes a las que se presentan en un entorno democrático, el cual es el foco de este trabajo.

posibilitó que la sociedad recibiera las reformas como medidas de última instancia a fin de superar una situación percibida como crítica por todos los actores. A ello se agregaron políticas tendientes a la desarticulación y desmovilización de los actores sindicales, aplicando selectivamente premios y castigos a fin de reforzar la relación clientelar establecida históricamente con éstos<sup>7</sup>.

Sin embargo, a medida que se profundizaron los procesos de reforma, los actores sociales comenzaron a rearticularse para confrontar y presionar en pro de sus intereses.

A pesar de que, en un primer momento, la implementación de las políticas de reforma se enfrenta, en ambos países, a un sindicalismo debilitado y deslegitimado, la naturaleza disímil de los sindicatos en los respectivos países resultó en un grado de participación diferente de la COB y la CGT en los procesos sociales.

En el segundo apartado de este trabajo caracterizamos al principal sindicato argentino, la CGT<sup>8</sup>, como un sindicato entroncado en el aparato estatal, nacido del signo corporativista del Estado peronista, con el cual se vinculó a través de relaciones clientelares que se reproducen hasta hoy.

El carácter de esa vinculación y su origen estatal determinaron su papel secundario como canal de expresión de las demandas sociales frente a las políticas de reforma.

Su pasividad frente a la implementación de las reformas tiene menos que ver con que haya sido un líder político del justicialismo el que la encaró que con la dinámica clientelar propia de su relación con el aparato estatal, independientemente del color partidario que adoptase éste.

El sindicalismo argentino no articuló una estrategia de confrontación frente a las reformas porque no estaba dispuesto a poner en peligro el acceso a los recursos del patronazgo estatal. Su creciente pérdida de legitimidad<sup>9</sup> condujo a conformación de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) en 1992, integrada por trabajadores ocupados y desocupados que se organizaron como canal alternativo al sindicalismo representado por la CGT.

En Bolivia, es la COB la que aglutina a las organizaciones de los distintos sectores.

A diferencia de lo expuesto para el caso argentino, la central obrera boliviana nace al calor de la revolución del 52, y, aunque presenta pautas clientelares de relación con el Estado, ésta ha sido históricamente más combativa que la CGT argentina. Este mayor nivel de radicalidad deviene de la particular naturaleza del sindicalismo minero y campesino que configura los patrones de conflicto de la clase obrera boliviana en su conjunto<sup>10</sup>.

El núcleo de la COB está conformado por el sector minero. Éste se constituyó como núcleo no tanto por su peso cuantitativo, sino gracias a las particulares características que presentaba: un origen cultural común, la concentración en un escenario extraño y la conformación de una idea de comunidad derivada de los

---

<sup>7</sup> Ídem.

<sup>8</sup> La Confederación General del Trabajo es un ente que aglutina a los delegados de los distintos sindicatos. Su relación clientelar con el Estado se estableció con el peronismo, pero se mantuvo a través de los distintos cambios de gobierno, estableciéndose como modalidad hasta nuestros días.

<sup>9</sup> Estamos tomando en consideración sólo el período de implementación de las reformas neoliberales. La fragmentación de la CGT es una tendencia anterior, pero el protagonismo de las nuevas organizaciones sindicales en un clima de creciente conflictividad social generado por las reformas justifica la importancia que se le asigna a la conformación de la CTA.

<sup>10</sup> Zabaleta Mercado, René (comp.). "Bolivia hoy". Ed. siglo XXI. 1983.

procesos cotidianos de trabajo.

Este sector, siguiendo la exposición de Zabaleta Mercado, debe su centralidad a que la confluencia de estas características lo posicionó como el único capaz de hacer un acto de irradiación sobre su atmósfera inmediata (comerciantes de los distritos mineros, “amas de casa”, etc.) y sobre el campesinado, llegando abarcar a toda la clase obrera boliviana. Las modalidades del sindicalismo campesino y de los trabajadores asalariados no productivos tienden a imitar el patrón establecido por el sindicalismo minero.

De allí emana la capacidad de la COB de rearticularse y recuperar, a medida que avanzaba la lucha social, un grado de legitimidad que no pudo alcanzar la CGT en Argentina, en un contexto de emergencia del conflicto social de similares características.

Pese a ello, el rol de la COB en el conflicto social no se transformó en liderazgo.

Esta imposibilidad deviene, por una parte, de que una de las principales acciones de Paz Estensoro durante el lanzamiento de la NPE fue la desarticulación de la Central Obrera Boliviana. Su naturaleza de confrontación, la hacía menos plausible de ser cooptada en la coalición que la CGT argentina.

Por otra parte, es fruto de su incapacidad para articular un contradiscurso que alineara tras de sí a los vastos sectores movilizados. Esta incapacidad es consecuencia del poder de articulación hegemónica del discurso elaborado por los partidos que encargaron de la implementación del Estado Benefactor, el MNR en Bolivia y el Peronismo en Argentina.

Estos partidos lograron construir un *operador ideológico*, un eje oscilante y flexible que contenía los dos extremos contradictorios de la sociedad, el nacionalismo de la derecha y lo revolucionario de la izquierda. En Argentina esta articulación se manifestó en la llamada “tercera posición” del peronismo, en Bolivia se plasmó incluso en la nomenclatura del partido que encabezó el proyecto de construcción del Estado del 52, el Movimiento *Nacional revolucionario*.

Ese Nacionalismo revolucionario (en adelante NR) no es una ideología de centro, sino un puente que comunica la extrema izquierda con la extrema derecha, permitiendo así la inclusión de sectores sociales con intereses contradictorios en una misma alianza multclasista. Este es el mecanismo ideológico que expande la hegemonía<sup>11</sup> de las clases dominantes a toda la formación social, desarticulando permanentemente los posibles focos de conflicto<sup>12</sup>.

Con la implementación de las medidas neoliberales se comienza a resquebrajar el sustento hegemónico del NR, y estalla el conflicto social. El sindicalismo no logró, cuando la necesidad se hizo más apremiante, construir un discurso alternativo. De ello se deriva su divorcio de la sociedad en el momento exacto en que ésta comienza a ser partícipe de escenarios de conflictividad cada vez más radicalizados.

La movilización social, en el momento de mayor conflictividad, queda acéfala. Los canales tradicionales de articulación de demandas, como son los sindicatos, no cuentan con la capacidad de conducir el proceso. Ello da lugar no sólo a la

<sup>11</sup> El concepto de hegemonía se aplica a aquella clase dominante que logra presentar sus propios intereses como los intereses del conjunto de la sociedad (Gramsci).

<sup>12</sup> Antezana Luis: “Sistema y proceso ideológicos en Bolivia”. Zabaleta Mercado, René (comp.). “Bolivia hoy”. Ed. siglo XXI. 1983. Aunque la tesis del autor se desarrolla en torno al caso de Bolivia consideramos pertinente su aplicación al caso del peronismo en Argentina.

emergencia de nuevas organizaciones y movimientos sociales, sino que, al mismo tiempo, abre el camino a una inédita radicalización del conflicto, desaparecida la legitimidad de las mediaciones capaces de canalizarlo.

Frente a la crisis del sindicalismo argentino, y a la incapacidad de liderazgo del sindicalismo boliviano, cabe preguntarse “hasta qué punto es posible para la clase obrera la sustitución de las características propias de su momento constitutivo. Cuánto tiempo puede mantener una deslealtad hacia el estado”<sup>13</sup>.

### ■ El estallido del conflicto social. Los casos de Cutral Có y “La guerra del agua” en Cochabamba. Las destituciones de De la Rúa y Sánchez de Lozada

Dentro del arco de reformas que se implementaron en Argentina, hubo una en particular que generó un nivel de radicalización social inaudito en el país, la emergencia de nuevos movimientos sociales y la adopción de modalidades de lucha desconocidas hasta ese momento. Estamos haciendo referencia al conflicto derivado de la privatización de la empresa YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) que tuvo lugar en las localidades petroleras de Cutral Có y Plaza Huincul en la provincia de Neuquén (1996-1997).

En Bolivia también fue la privatización de empresas estatales la que generó los mayores niveles de conflicto. Sobresalen como casos paradigmáticos el conflicto del agua en Cochabamba y la Ley de Hidrocarburos impulsada por el gobierno de Sánchez de Lozada.

Cutral Có y Plaza Huincul se desarrollaron en torno a YPF. Su privatización no sólo generó una drástica reducción de personal, sino que, además, desarticuló su rol de contención social (YPF había desarrollado clubes, escuelas, hospitales, barrios y viviendas para los trabajadores.).

La reacción social se materializa en dos episodios de conflicto que implementan, por primera vez, una nueva forma de lucha que se constituirá como dominante hasta la actualidad: el corte de rutas. De ella surgen nuevas personificaciones, el “piquetero” y “el fogonero”. Estas nuevas figuras asumirán el liderazgo del conflicto, desplazando al sindicalismo tradicional representado por la CGT.

Participan la CTA, comisiones vecinales, trabajadores ocupados, semi-ocupados y desocupados de YPF, contratistas, obreros de la construcción, amas de casa, empleados estatales y fracciones de la clase media.

Estos episodios generaron, a su vez, un cambio en la dinámica de toma de decisiones, instrumentando medidas de democracia directa por medio de las asambleas populares.

Ambos se desarrollaron por fuera de los canales legales. Las instituciones no consiguieron canalizarlos, sino sólo en los momentos de negociación.

La concesión que este conflicto logra arrancar al gobierno es la creación de mil setecientos puestos de trabajo, de los cuales quinientos eran en YPF y mil doscientos eran empleos temporarios del Plan Trabajar<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Zabaleta Mercado, René: “Forma clase y forma multitud en el proletariado minero en Bolivia”. Zabaleta Mercado, René (comp.) “Bolivia hoy”. Ed. siglo XXI. 1983

<sup>14</sup> Hasta la actualidad, cuando se van venciendo los Planes Trabajar, los fogoneros amenazan con el corte de rutas, y entonces se renuevan los planes, subsidios y puestos de trabajo.

El estallido social del 2001 que termina con la caída del presidente De la Rúa viene de la profundización de estas dinámicas a nivel nacional. Dinámicas que lograron contrarrestar la fragmentación que habían sufrido las organizaciones sindicales y los movimientos sociales a principios de los noventa, dando lugar a la reconstitución y el surgimiento de nuevos colectivos sociales, asociados a nuevas formas organizativas y de protesta. La crítica al conjunto del régimen político constituyó un proceso de reapropiación social de lo público-político.

Las nuevas dinámicas a nivel nacional, entonces, deben su origen a procesos regionales. Lo mismo puede decirse con respecto a Bolivia, en el caso de “la guerra del agua” en Cochabamba (2000). Su desencadenante fue la decisión del gobierno de conceder a una empresa transnacional, la Bechtel (Aguas de Tunari, en su nombre local), la facultad de gestionar y distribuir toda el agua de la ciudad de Cochabamba y sus alrededores. El contrato fue casi clandestino (tenía una cláusula de confidencialidad) y violentaba las formas tradicionales establecidas para la distribución del recurso<sup>15</sup>. La lucha por modificar ese contrato llevó a la creación de la Coordinadora por la Defensa del Agua y de la Vida.

La ciudad completa se levantó en contra de la privatización y decidió, en cabildo abierto, mantener tomada la ciudad hasta que se eche abajo la ley. La coordinadora adoptó una postura moderada, exigiendo la modificación de la ley, pero la población comenzó a exigir que Aguas de Tunari se retire. El gobierno intentó llegar a una conciliación proponiendo un freno al aumento tarifario. La comunidad no lo aceptó y el gobierno envió tropas policiales para desarticular a la población. Viéndose desbordadas por la resistencia social, se retiraron. El gobierno tuvo que firmar nuevamente un convenio con la Coordinadora para la revisión del contrato, que terminó con el retiro de Aguas de Tunari.

La Coordinadora no sólo organizó un cabildo abierto, sino que también entregó una ley al gobierno e hizo una consulta pública. A pesar de su claro liderazgo durante el conflicto, la movilización social la sobrepasó.

Luego de “la guerra del agua” estalla “la guerra del gas”, como consecuencia de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos, que en el 2003 lleva a la destitución del presidente Sánchez de Lozada.

El movimiento campesino (organizado en la CSUTCB<sup>16</sup>) llama al bloqueo de las carreteras del Altiplano y, mientras los cortes ganan en extensión, la COB, que ha logrado salir de su prolongada crisis, llama a la huelga general indefinida y al bloqueo de caminos a nivel nacional, exigiendo la nacionalización del gas y la dimisión del presidente. El Alto<sup>17</sup>, ciudad aymara, se erige en capital de la revuelta<sup>18</sup>. Participan campesinos cocacoleros, mineros, sindicatos, juntas vecinales y miles de pobladores. Las COD y las COR (centrales departamentales y regionales de la COB) tuvieron un rol protagónico en el conflicto, papel que no logró cumplir la CGT, en el caso argentino.

Estos ejemplos son ilustrativos con respecto a las diferentes dinámicas de

---

<sup>15</sup> “En Bolivia conocemos eso de los usos y costumbres, o sea, las comunidades han ido gestionando sus recursos de manera autónoma a cualquier poder estatal”. Gabriel Herbas, economista miembro del foro cochabambino de Medio Ambiente y portavoz de la Coordinadora del Agua. Entrevista de Ana Esther Ceceña. <http://ezln.org/revistachiapas/Nº14>.

<sup>16</sup> Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.

<sup>17</sup> Suburbio pobre que se levanta por encima de la Paz, en el límite del Altiplano.

<sup>18</sup> Los pobladores del Alto bajan a la ciudad de La Paz al grito de “Ahora sí, guerra civil”

movilización social que se articulan en ambos países.

La sociedad boliviana presenta una mayor capacidad de estructuración, cada sector social cuenta con una organización que le es propia y cuya constitución es, en la mayoría de los casos, anterior a la implementación de las reformas neoliberales. Esta diferencia fundamental nace de la histórica incapacidad del Estado boliviano para cumplir sus funciones en todo el territorio nacional, lo cual conllevó el surgimiento de formas paralelas de institucionalidad paraestatal con grados de autonomía y coordinación que vinieron a llenar ese vacío<sup>19</sup>.

Esta distintiva capacidad de organización es la que permitió, frente a los intentos de privatizar los recursos naturales, la conformación de Coordinadoras que encausaran los procesos de lucha. Su emergencia muestra una capacidad de autogestión que va más allá de lo pudieron alcanzar los movimientos sociales en Argentina, a excepción, quizás, del movimiento de fábricas recuperadas.

Esta capacidad de autogestión no implica, sin embargo, que exista en Bolivia una mayor unidad de los diferentes sectores de la que se observa en Argentina. "Cada sector social posee una demanda particular, por la cual lucha y realiza su propia movilización"<sup>20</sup>.

Sin embargo, existen momentos en que se logra una aglutinación. El eje articulador a nivel nacional parece ser la defensa de los recursos naturales. En Argentina no existe un eje semejante. La convergencia de sectores sociales en los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, y parte del 2002, no logró reproducirse en el tiempo, y es incierto que se reactive en próximos estallidos. Por el contrario, el eje articulador en Bolivia gira en torno a un ser cultural, anterior a la conformación de la idea de Nación, de lo cual deviene su estabilidad.

Por otra parte, las nuevas formas de lucha que emergen en Argentina durante el conflicto en Neuquén eran utilizadas en Bolivia con anterioridad.

La prematura organización de los movimientos sociales implica no sólo una cultura de articulación más acabada que en caso argentino, sino también una mayor experiencia en torno a la utilización de formas de lucha radicales como son los cortes de ruta y la toma de ciudades.

La movilización social en Argentina logra articularse y desarrollar nuevas formas de lucha como consecuencia de la implementación de las reformas. En cambio, los movimientos sociales en Bolivia cuentan con una larga data de tradiciones de autoorganización comunitaria, que no sólo derivan de la implementación de las reformas neoliberales, sino que se relacionan con su propia estructura social. El neoliberalismo se enfrenta en Bolivia con "un país de base indígena y comunitaria, que lleva una revolución en las espaldas, clase obrera, sindicatos, tradición de izquierda, y una historia de participación directa en la política"<sup>21</sup>.

La rearticulación de la COB permitió una mayor organización de los sectores en el conflicto, que en caso argentino tomó un carácter más anárquico, como consecuencia de la inexperiencia de los nuevos movimientos sociales y de las recientes organizaciones sindicales. Es esta mayor experiencia y organización de la sociedad boliviana la que hace la diferencia en cuanto a los objetivos que se alcanzan. En "la guerra del agua", se logra el retiro de una empresa transnacional y

<sup>19</sup> Suarez, José Hugo. "Seis claves para interpretar la crisis boliviana". Memoria. N° 198. 2005.

<sup>20</sup> Ídem.

<sup>21</sup> Ídem.



la concesión del servicio a la Coordinadora. En Cutral Có se obtienen planes asistenciales.

### ■ **Situación actual del conflicto social. La reestabilización argentina frente al creciente radicalismo y conflictividad bolivianos. Sus raíces y perspectivas**

Los estallidos del 2001 en Argentina y del 2003 en Bolivia dejaron saldos diferentes.

Luego de la crisis institucional que se abrió con la caída del presidente De la Rúa la situación se reestabilizó. Los factores que lo posibilitaron tienen que ver tanto con el sistema de partidos como la estructura social argentina.

El justicialismo, ganador en las elecciones del 2003, es un partido de alcance nacional, que ha logrado históricamente cooptar a vastos sectores sociales por medio de prácticas clientelares, que desactivan y desarticulan la conformación de movimientos sociales.

Muchas de las organizaciones que nacieron al calor del estallido social del 2001 y de la oposición a las políticas neoliberales han desaparecido en la actualidad (las asambleas barriales por ejemplo). Persisten gran parte de los movimientos de desocupados, pero sus reclamos, en la mayoría de los casos, articulan una demanda de fuentes de trabajo con una demanda de planes sociales. La aceptación de programas asistenciales es un factor que impide la emergencia de discursos más contestatarios.

El cuestionamiento al sistema político por parte de todos los sectores se diluyó con las elecciones del 2003, donde el voto en blanco y nulo no fueron los grandes protagonistas. Ello se reprodujo, aun en mayor medida, durante las últimas elecciones del 2005.

La izquierda se mostró incapaz de canalizar el descontento social, y el partido justicialista logró desarticularlo, gracias a su ya mencionada capacidad de cooptación, resultado de prácticas clientelares, programas asistenciales, y esa característica tan particular que lo singulariza: su capacidad de transformarse acorde a las necesidades de cada coyuntura histórica.

Bolivia, en cambio, no cuenta con un partido de fuerte base nacional, su sistema de partidos se caracteriza por un alto nivel de fragmentación, tendencia que se vio acentuada en las elecciones del 2002, con el ascenso de partidos políticos de base indígena y campesina. El peso de la población indígena y campesina y la centralidad del sector minero dentro del movimiento obrero dan lugar a una estructuración social radicalmente diferente a la argentina.

Ésta es la que permitió la anticipada conformación de movimientos y organizaciones sociales. Al estar construidas en torno a una identidad étnica, al ser poseedoras de una cultura de autogestión derivada de las particulares dinámicas de trabajo agrícola y minero, no son susceptibles de desarticulación por cambios en la coyuntura histórica.

En ninguno de los dos países, los diferentes sectores que se aglutinaron a fin de oponerse a la implementación de las reformas lograron mantener la cohesión entre ellos.

Pero mientras que en Argentina muchos de los nuevos movimientos sociales se desarticulaban, desapareciendo, en Bolivia, las particulares condiciones que les

dieron origen garantizaron su supervivencia.

Los niveles de resistencia popular que caracterizan a Bolivia no devienen simplemente de su pobreza material, de que más del 70% de su población no tenga satisfechas sus necesidades básicas. Son resultado, en mayor medida, de una particular estructuración social, donde campesinos, indígenas y mineros han logrado reproducir sus tradiciones de autogestión y de lucha adaptándolas a los nuevos tiempos.

Pero esa resistencia, tendrá que ser necesariamente encausada bajo un liderazgo. El cual, para constituirse como tal, deberá ser capaz de articular un contradiscurso capaz de aglutinar a los diferentes sectores sociales. De ello depende que la sociedad boliviana logre disputar, y definir, la historicidad.

Estas diferencias, en cuanto al grado de organización, autogestión y experiencia, no necesariamente condenan el futuro de la lucha social en Argentina. Sus posibilidades de organización y éxito dependerán, en gran parte, del aprendizaje que logren hacer los movimientos sociales de sus experiencias recientes, de su capacidad crítica frente a una realidad cada vez más avasalladora.

Enfrentar la fragmentación social que impone el modelo neoliberal es una necesidad imperante, a ella es necesario oponerle dinámicas de cohesión, que ya han emergido. Articularlas en un nuevo patrón hegemónico es la tarea que queda para el futuro.

## ■ Bibliografía

Basualdo, Eduardo M., "La crisis actual en Argentina: entre la dolarización, la devaluación y la redistribución del ingreso". Disponible en: [www.ezln.org/revistachiapas/N13](http://www.ezln.org/revistachiapas/N13)

Kruse, Tom, "Transición política y recomposición sindical. Reflexiones desde Bolivia.". Disponible en: <http://sala.clacso.org.ar>

Levy, Bettina (comp.), *Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas*, CLACSO, Buenos Aires, 2002.

Ceceña, Ana, "La guerra del agua en Cochabamba". Disponible en: [www.ezln.org/revistachiapas/N14](http://www.ezln.org/revistachiapas/N14).

Del Álamo, Oscar, "La herencia de junio 2002: emergencia indígena y sistema de partidos", en *Revista "Desarrollo humano e institucional en América Latina"*, N° 44, 2003.

Lewis, Tom, "Rebelión en Bolivia". Disponible en: [www.socialistworker.org](http://www.socialistworker.org), 31 de octubre de 2003.

López y Díaz Pérez, "Tristezas y melancolía del capitalismo", en *Revista de economía política "Pensamiento iberoamericano"*, N° 16, Madrid, 1989.

Saéz, Roberto, "Bolivia en pie de lucha: la insurrección de las piedras y los palos". Disponible en: [www.mas.org.ar/periodicos](http://www.mas.org.ar/periodicos)

Seoane, José, "Crisis de régimen y protesta social en Argentina". Disponible en: [www.ezln.org/revistachiapas/N13](http://www.ezln.org/revistachiapas/N13).

Seoane, José (comp.), *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, 2003.

Suarez, José Hugo, "Seis claves para interpretar la crisis boliviana", en *Memoria*, N° 198, 2005.

Toer, Mario, "Algunas notas sobre momentos significativos de la historia social de América Latina", Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.

Torre, Juan Carlos, *El proceso político de las reformas económicas en América Latina*, Ed. Paidós, 1998.

Zabaleta Mercado, René (comp.), *Bolivia hoy*, Ed. siglo XXI, 1983.

Como citar: Macarena Romero, "Las reacciones sociales a las políticas de reforma en Argentina y Bolivia", artículo elaborado para *Política Latinoamericana*, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, noviembre de 2005.